

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
- SECCIÓN TERCERA -

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
RADICACION No.:	11001-33-43-064-2021-00016-00
DEMANDANTE:	WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES
DEMANDADOS	NACIÓN – RAMA JUDICIAL, MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL – SIJIN y la SOCIEDAD ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S
ASUNTO	APRUEBA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Procede el Despacho a resolver sobre la aprobación o improbación del acuerdo contenido en el Acta de Conciliación No. E-2020-626063 del 27 de enero de 2021, celebrada ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001.

I. ANTECEDENTES

El señor Walter Epifanio Asprilla Cáceres, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de conciliación judicial, el 25 de noviembre de 2020, ante la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de que fuese convocada la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL – SIJIN y la SOCIEDAD ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. en aras de conciliar los perjuicios materiales y morales que, se indica, le fueron causados como consecuencia de la pérdida del vehículo automotor tipo camioneta, marca Mazda, placas JCS 971, modelo CX5 del 2017, de propiedad de actor, luego de que el rodante fuera objeto de embargo y secuestro en dos procesos ejecutivos que se adelantaron en contra del actor.

Con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, el convocante, pretende acreditar el requisito de procedibilidad necesario para poder instaurar el medio de control de reparación directa.

## 2.- HECHOS

1. Que con ocasión del proceso ejecutivo N° 11001400302920170074100 incoado por la empresa Carro Fácil de Colombia S.A.S., en contra del señor Walter Epifanio Asprilla Cáceres, en fecha 4 de agosto de 2017, se dictó mandamiento de pago, en contra del actor, y se decretó como medida cautelar el embargo y secuestro del vehículo automotor tipo camioneta, marca Mazda, placas JCS 971, modelo CX5 del 2017, de propiedad de demandante; medida que dio lugar a que el rodante fuera inmovilizado y puesto a disposición del juzgado, y en bajo custodia del “*parqueadero por embargo judicial La Principal S.A.S.*”.

2. Que el proceso de ejecución en mención terminó en octubre de 2019, bajo la ejecución del Juzgado 17 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, por pago total de la obligación, previa conciliación entre las partes, por el monto de \$53'000.000.

3. Que el vehículo en mención, pasó luego, como remanente al proceso de ejecución N° 11001400302420170082100 que adelantaba el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Bogotá; proceso que finalizó en el mes de febrero de 2020, por pago total de la obligación.

4. Que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que reposaran sobre el vehículo en mención. En tal virtud, dicha Sede Judicial mediante oficio N° 13280 del 6 de marzo de 2020 informó a la empresa Almacenamiento de Vehículos por Embargo Judicial La Principal S.A.S., sobre la terminación del proceso ejecutivo promovido en contra del actor por pago total de la obligación y el levantamiento de la medida de secuestro y aprehensión decretada sobre el automotor de propiedad del demandante.

5. Con base en lo anterior, el día 17 de junio de 2020, el señor Walter Epifanio Asprilla Cáceres se dirigió, con el citado oficio, a las instalaciones del parqueadero en mención para solicitar la entrega del rodante, pero en ese

momento le indicaron, verbalmente, que el vehículo no podía devolverse como quiera que el mismo no se *"encontraba en posesión del parqueadero"*.

6. Que el Juzgado 17 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, mediante oficio N° 12051 del 30 de junio de 2020, reiteró que el rodante se encontraba en custodia de la Sociedad Almacenamiento de Vehículos por Embargo La Principal S.A.S.

7. Que la Sociedad Almacenamiento de Vehículos por Embargo La Principal S.A.S., en fecha 7 de julio de 2020, manifestó que vehículo de propiedad del accionante había sido hurtado mientras éste se encontraba bajo su custodia.

8. En respuesta a una petición elevada por el actor, el Juzgado 6 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, en fecha 26 de octubre de 2020, manifestó que el reclamo del vehículo en mención debía realizarse directamente ante la Sociedad Almacenamiento de Vehículos por Embargo la Principal S.A.S.

9. Que ni los Juzgados de Ejecución en mención, ni la Sociedad Almacenamiento de Vehículos por Embargo la Principal S.A.S., han respondido al demandante por la pérdida del vehículo de propiedad del actor mientras se encontraba aprehendido por orden judicial.

### **3.- PRUEBAS QUE OBRAN DENTRO DEL TRÁMITE CONCILIATORIO**

1. Copia de Oficio N° 13280 del 6 de marzo de 2020, por medio del cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, le informó al Parqueadero La Principal S.A.S., que dentro del proceso ejecutivo N° 11001-40-03-204-**2017-00821**-00, iniciado por la señora ELIANA PATRICIA MURILLO OROZCO en contra de WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, mediante auto del 7 de febrero de 2020, se decretó la terminación del proceso por pago total de la obligación, y en consecuencia, se ordenó el levantamiento de la aprehensión que recae sobre el vehículo automotor de placas JCS-971 de propiedad del demandado. En tal virtud, señaló el aludido Despacho Judicial que el referido parqueadero debía aplicar las tarifas de parqueo vigentes, en

virtud de lo previsto en la Resolución 9540 de 2018 (fl. 11 del expediente digital).

2. Copia del Informe de Parqueadero elaborado por el Representante Legal de la Sociedad Almacenamiento de Vehículos por Embargo La Principal S.A.S., dirigido al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, con fecha de radicado del 24 de julio de 2019, en el que informa que, por motivos de reorganización de la empresa, el rodante fue trasladado a una bodega de propiedad de esa misma sociedad (fl. 14 del expediente digital).
3. Copia del Oficio N° 12051 del 30 de junio de 2020, elaborado por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, dirigido al señor Walter Epifanio Asprilla Cáceres, en el que le informa que dentro del proceso ejecutivo N° 11001-40-03-029-**2017-00741-00** promovido por Carrofácil de Colombia S.A.S., contra el señor Walter Epifanio Asprilla Cáceres (fl. 15 del expediente digital).
4. Copia del auto de fecha 26 de octubre de 2020, emitido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo N° **2017-00821**, adelantado por la señora ELIANA PATRICIA MURILLO OROZCO en contra del señor WALTER ASPRILLA CÁCERES mediante el cual informa al demandado, que la medida cautelar impuesta sobre el vehículo automotor de placas JCS-971 había sido decretada por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, y que por lo tanto, el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Bogotá, no tenía conocimiento de que la empresa Almacenamiento de Vehículos por Embargo Judicial La Principal hubiera realizado manifestación alguna frente a la pérdida del automotor de propiedad del demandado (fl. 18 del exp- digital).
5. Copia de derecho de petición elevado por el señor WALTER ASPRILLA CÁCERES, ante la empresa ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL SAS, en el que solicita información acerca del trámite que debe adelantar ante dicho parqueadero para retirar el vehículo de placas JCS -971, automotor embargado en virtud de dos procesos ejecutivos, que se habían adelantado en su contra, por parte de los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Sexto de Ejecución Civil Municipal de Bogotá. Ello teniendo en

cuenta que los referidos procesos de ejecución habían finalizado por pago total de la obligación (fl. 20 del exp- digital).

6. Copia de respuesta a derecho de petición emitida por el Representante legal de la empresa ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL SAS, al señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, en la que informa que el día 3 de marzo de 2020, se puso en conocimiento de las autoridades competentes la pérdida del vehículo del peticionario, y que la empresa estaba dispuesta a conciliar los daños ocasionados (fs. 21 y 22 del exp. digital).
7. Copia de certificación emitida por la empresa Carrofácil de Colombia SAS, de fecha 10 de enero de 2020, en la que se indica que el señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, se encuentra a paz y salvo con el crédito que se le otorgó por parte de dicha firma comercial (fl. 29 exp – digital).
8. Copia de Licencia de Tránsito N° 10012063721 emitida a favor del señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES sobre el vehículo tipo camioneta de placas JCS -971, marca Mazda, línea CX-5, modelo 2017 (fl. 30 del
9. Poder conferido por la Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la Doctora Yadira Hernández Ramírez (Fs.79 a 84 del expediente digital).
10. Copia de la certificación N° 0119-2021, de fecha 27 de enero de 2021, emitida por la Secretaria Técnica del Comité Nacional de Defensa Jurídica y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el que se indica que no es procedente proponer fórmula conciliatoria con el convocante WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, como quiera que la solicitud de conciliación prejudicial carece de los presupuestos de forma y, en tal virtud, no se allegaron la totalidad de las pruebas que permitan realizar un estudio de responsabilidad de la Rama Judicial en la causación de los daños alegados (fl. 85 del exp-digital).
11. Poder conferido por el Jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional a la doctora ANDREA PATRICIA RAMÍREZ PINEDA (fs. 86 a 102 del exp-digital).

12. Poder de sustitución otorgado por la doctora ANDREA PATRICIA RAMÍREZ PINEDA, al doctor OSCAR DANIEL HERNÁNDEZ MURCIA (fl. 103 del exp-digital).
13. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL SAS (Fs. 106 a 113 del exp- digital).
14. Copia de escrito signado por el señor SERGIO ESTEVAN CASTIBLANCO CRISTANCHO, en calidad de representante legal de la empresa ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL SAS, por medio del cual realiza una oferta comercial para indemnizar de manera integral al señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, como consecuencia de los hechos delictivos de que fue objeto el vehículo de placas JCS-971 (fs. 116 a 118 del exp -digital).
15. Acta de conciliación No. E-2020-626063 del 25 de noviembre de 2020, celebrada ante la Procuraduría 134 Judicial II para asuntos Administrativos (fs. 119 a 123 del exp-digital).

#### **4.- ACTA DE CONCILIACIÓN**

El 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo, ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, la audiencia de conciliación prejudicial, en la cual se dijo lo siguiente (se transcribe literal, incluso con errores):

*" (...) Según la certificación del comité de conciliación aportado por el apoderado(a) de la parte convocada LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ, JUZGADO 17 CIVIL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ, y como lo dijo en audiencia, la decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad en relación con la solicitud incoada fue la siguiente: "CERTIFICACIÓN No. 0119-2021 LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Conforme con las facultades y directrices dadas por el Comité de la Entidad, CERTIFICA: Que el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la sesión celebrada el veintiséis (26) de enero dos mil veintiuno (2021), según consta en el Acta 003, estudió y analizó la solicitud de conciliación presentada por WALTER EPIFANIO ASPRILLA CACERES, que se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, en agotamiento del requisito de procedibilidad. El*

Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación decidió, por unanimidad, que en el presente asunto no debe proponerse fórmula conciliatoria, acogiendo la recomendación o concepto del abogado (a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, según la cual: **NO ES PROCEDENTE PROPONER FÓRMULA CONCILIATORIA**, con el convocante **WALTER EPIFANIO ASPRILLA CACERES** por cuanto la solicitud de conciliación extrajudicial carece de los presupuestos de forma establecidos en la normatividad que regula la materia, toda vez que no se allegaron la totalidad de las pruebas que permitan hacer un estudio de fondo de la petición, debiendo allegar el convocante copia de los procesos judiciales que menciona Nos. 11001400302920170074100 y 1100140030242017008210 a efectos de analizar la responsabilidad de la Rama Judicial en los presuntos daños alegados. Resulta pertinente destacar que, en relación con el tema de las pruebas en la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, el legislador y la jurisprudencia recalcan la necesidad de sustentar con pruebas el respectivo acuerdo, de manera tal que sin que exista el adecuado y suficiente respaldo probatorio, no resulta jurídicamente posible conciliar en esta materia. (...) Según lo manifestado por el apoderado(a) de la parte convocada **POLICÍA NACIONAL- SIJIN**, y como lo dijo en audiencia, la decisión tomada por la entidad en relación con la solicitud incoada fue la siguiente: "me permito manifestar al Despacho que en el presente asunto no hay decisión del Comité, por cuanto no ha sido sometido al mismo por parte del funcionario a quien se le asignó por reparto, por lo cual presento disculpas frente a esta situación administrativa." Según lo manifestado por el apoderado(a) de la parte convocada **SOCIEDAD ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S**, y como lo dijo en audiencia, la decisión tomada por su representada en relación con la solicitud incoada fue la siguiente: "se le ofrece al señor **WALTER EPIFANIO ASPRILLA CACERES**, como indemnización, **POR REPARACION INTEGRAL** y pago del vehículo de placa **JCS971**, **LA PRINCIPAL S.A.S.**, la suma de \$ 52.000.000.00 (Cincuenta y Dos Millones de Pesos M/CTE) los cuales serán cancelados **EN 6 CUOTAS CADA UNA POR UN VALOR DE \$8.666.000.00** (Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Seis mil pesos) mediante cheque de gerencia a nombre de **WALTER EPIFANIO ASPRILLA CACERES**, durante los meses de **MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2021**, pago que se hará el 1 de cada mes; (...)

El apoderado(a) de la parte **CONVOCANTE** escuchó en audiencia la posición de las convocadas y manifiesta en la misma diligencia: "De conformidad con lo manifestado por las entidades convocadas **LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ, JUZGADO 17 CIVIL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ - SIJIN** solicito se declare fallida y frente a la **SOCIEDAD ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S** **me permito manifestar que acepto en su totalidad la propuesta de la entidad convocada respecto al valor y forma de pago**". A solicitud de la apoderada de la Rama Judicial, la Procuradora Judicial pone de presente a la apoderada de la parte convocante que en las condiciones en que fue planteada y aceptada la fórmula de

**conciliación no procedería adelantar proceso judicial contra las convocadas NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ, JUZGADO 17 CIVIL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ y POLICÍA NACIONAL-SIJIN, respondiendo la apoderada de la parte convocante que así lo entiende y está conforme con ello.** La Procuradora Judicial declara fallida la audiencia de conciliación frente a la RAMA JUDICIAL y POLICÍA NACIONAL y deja constancia, tal como se dijo analizó en precedencia con las apoderadas, que la parte convocante desiste de iniciar acción judicial contra las aquí convocadas **por cuanto se concilió la totalidad de las pretensiones con la convocada - SOCIEDAD ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S.**” (folios 119 a 123 del expediente digital)

## II. CONSIDERACIONES

### 2.1 - COMPETENCIA.

Este Juzgado es competente para emitir decisión de fondo sobre la aprobación de la conciliación prejudicial celebrada por las partes, en los términos del artículo 24 de la Ley 640 de 2001.

### 2.2. FUNDAMENTOS LEGALES

- El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, señala:

*"Podrán conciliar, total o parcialmente (...), las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las **acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.***

*Para los efectos del inciso anterior los entes territoriales estarán representados así: La Nación por los Ministros, los Jefes de Departamento Administrativo, los Superintendentes, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Los Departamentos por los respectivos Gobernadores; las Intendencias y Comisarías por los Intendentes y Comisarios; el Distrito Especial de Bogotá, por el Alcalde Mayor y los Municipios por sus Alcaldes.*

*Las Ramas Legislativa y Jurisdiccional estarán representadas por los ordenadores del gasto.*

*Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus representantes legales, directamente o previa autorización de la respectiva Junta o Consejo Directivo, conforme a los estatutos que las rigen y a la asignación de competencias relacionadas con su capacidad contractual."*



-. A su vez, la Ley 640 de 1991 dispone en sus artículos 23 y 24:

*"**Artículo 23.** Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción."*

*"**Artículo 24.** Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, **al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación.** El auto aprobatorio no será consultable."*

### 2.3. FUNDAMENTOS LEGALES

-. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, señala:

*"Podrán conciliar, total o parcialmente (...), las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las **acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.***

*Para los efectos del inciso anterior los entes territoriales estarán representados así: La Nación por los Ministros, los Jefes de Departamento Administrativo, los Superintendentes, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Los Departamentos por los respectivos Gobernadores; las Intendencias y Comisarías por los Intendentes y Comisarios; el Distrito Especial de Bogotá, por el Alcalde Mayor y los Municipios por sus Alcaldes.*

*Las Ramas Legislativa y Jurisdiccional estarán representadas por los ordenadores del gasto.*

*Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus representantes legales, directamente o previa autorización de la respectiva Junta o Consejo Directivo, conforme a los estatutos que las rigen y a la asignación de competencias relacionadas con su capacidad contractual."*

-. A su vez, la Ley 640 de 1991 dispone en sus artículos 23 y 24:

*"**Artículo 23.** Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción."*

*"**Artículo 24.** Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, **al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación.** El auto aprobatorio no será consultable."*

En relación con los requisitos exigidos para la aprobación del acuerdo conciliatorio, así como de los asuntos conciliables en materia contencioso administrativa, el H. Consejo de Estado ha señalado<sup>1</sup>:

*"De acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:*

- *Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.*
- *Que las entidades estén debidamente representadas.*
- *Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto del convenio.*
- *Que no haya operado la caducidad de la acción.*
- *Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.*
- *Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación."*

## 2.4. CASO CONCRETO

### ***a) Capacidad para ser parte y para conciliar - autoridad competente para mediar la conciliación.***

La RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, estuvo representada en legal forma por la apoderada judicial YADIRA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien recibió mandato con facultad expresa para conciliar, de acuerdo con los parámetros que dados por el comité de conciliación de la entidad, de parte de la funcionaria BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, debidamente acreditada como Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Fl. 79 a 84).

Ahora, el MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL – SIJIN, también estuvo representado en legal forma por el apoderado judicial OSCAR DANIEL HERNÁNDEZ MURCIA, quien recibió sustitución de mandato por parte de la doctora ANDREA PATRICIA RAMÍREZ PINEDA, en los mismos términos en que a esta última profesional del derecho le había sido otorgado el poder con facultad expresa para conciliar y sustituir, por parte del funcionario FRANCISCO JAVIER

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-26-000-2012-01062-01(46768).

CASTRO GIL, debidamente acreditado como Jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional (fs. 86 a 102 del exp- digital).

Por su parte, la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., compareció a la actuación a través del apoderado judicial IVÁN DARIO PINZÓN MARTÍNEZ, quien ostentaba facultad expresa para conciliar, según el poder conferido en la diligencia por el representante legal de la referida Sociedad, el señor SERGIO ESTEVAN CASTIBLANCO CRISTANCHO, quien, a su vez, estaba debidamente acreditado en el proceso, según da cuenta el Certificado de Existencia y Representación Legal de dicha firma comercial (fs. 106 a 113 del exp-digital).

Finalmente, el convocante WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES confirió mandato judicial con facultad expresa para conciliar, a la profesional del derecho MARIA FERNANDA AGUDELO PALACIOS (fl. 44 del exp-digital).

Ahora bien, la referida conciliación fue celebrada ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos. Luego, se concluye que el presente acuerdo cumple con los requisitos establecidos en los artículos 53 y 54 del C. G. P. y en el artículo 15 de la ley 23 de 1991, pues las partes que intervinieron en la conciliación prejudicial son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, fueron debidamente representadas y cumplieron el trámite ante la autoridad competente.

### **3.1 Caducidad**

El artículo 61 de la Ley 23 de 1991, establece en su Parágrafo 2º que en materia contenciosa administrativa, ***“no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado.”***

Tal como se indica en el Acta de la Conciliación Prejudicial que aquí se revisa, la solicitud respectiva fue presentada el día **25 de noviembre de 2020**, mientras que el hecho objeto de indemnización, esto es, la pérdida del automotor de propiedad del convocante, **fue conocido por el actor el día 17 de junio de 2020**, según se indica en la demanda, cuando éste se dirigió al parqueadero para adelantar los trámites necesarios para solicitar el retiro del automotor, en virtud de la terminación por pago total de la obligación que decretó en los

procesos ejecutivos que dieron origen al embargo y secuestro del rodante. Por ello se advierte que el término de caducidad del derecho de acción no se encuentra vencido, ya que el trámite conciliatorio se adelantó dentro del término previsto en la Ley 1437 de 2011 (artículo 164 – numeral 2- literal i), teniendo en cuenta que el medio de control procedente para reclamar la aludida indemnización es el de *reparación directa*, estatuido en el artículo 140 ibídem.

Salta entonces a la vista que el acuerdo de conciliación se celebró dentro del plazo legal, y que por lo tanto, sobre él no opera el fenómeno jurídico de la caducidad.

### ***c) Revisión de inexistencia de lesividad para el erario público***

De acuerdo con lo establecido en el inciso 3º del artículo 73 de la Ley 446 de 1998, se procede a analizar si la conciliación efectuada resulta lesiva para los intereses patrimoniales del Estado.

En el presente caso, el acuerdo alcanzado por las partes tiene su fuente en la presunta responsabilidad patrimonial de las demandadas NACIÓN - RAMA JUDICIAL, MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL – SIJIN y la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., por el daño antijurídico consistente en la pérdida del automotor de placas JCS -971 de propiedad del señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, acaecido, dicho evento, mientras el vehículo se encontraba bajo la guarda y custodia de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., en virtud de una orden judicial de embargo y secuestro que había sido emitida, sobre dicho rodante, dentro de dos procesos de ejecución que se adelantaron en contra del aludido ciudadano, ante los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Sexto de Ejecución Civil Municipal de Bogotá.

En el sublite, se le atribuye este hecho dañoso a la convocadas NACIÓN – RAMA JUDICIAL y Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. en consideración a que fue aquella entidad la que ordenó el embargo y secuestro del rodante y ésta última firma comercial la que tuvo el rodante bajo su guarda y custodia mientras duró la vigencia de las medidas cautelares que se decretaron en el curso de un proceso de ejecución que se

adelantó en contra del convocante; este supuesto coincide con el denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y en tal virtud, el Despacho estima oportuno analizar el caso bajo estudio bajo este título de imputación.

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento del aparato judicial mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente:

*"ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales."*

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

*"ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación."*

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía<sup>2</sup>.

La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha establecido que la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia "se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.

*juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales*<sup>3</sup>. Igualmente pueden incluirse "(...) *todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales*"<sup>4</sup>.

Acoge el Despacho los anteriores criterios jurisprudenciales y, en tal sentido, se determina que el régimen de imputación que resulta aplicable al caso que nos ocupa, es el de falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que la controversia se centra efectivamente en el daño irrogado a un ciudadano como consecuencia de la pérdida del vehículo automotor de su propiedad de placas JCS -971, que se encontraba embargado e inmovilizado en virtud de un proceso ejecutivo que se adelantaba en su contra.

De la responsabilidad del Estado, por el funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia, el Consejo de Estado ha señalado que ésta "se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales", la cual encaja en la tesis de la falla probada en el servicio<sup>5</sup>. Igualmente, que pueden incluirse "(...) *todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los*

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también "cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones "que... efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

<sup>5</sup> En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 8304, en donde dicha Corporación concluyó: "La Sala concluye que mediante la valoración de la prueba recaudada en el proceso deduce que a Fernando Jiménez Hernández se le causó un daño antijurídico, consistente en la privación de que se realizara el correspondiente remate en el proceso ejecutivo que adelantó y el consecuente pago total de su crédito. En el caso concreto el comportamiento de la demandada, esto es el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, provocó una situación definitiva que condujo a detener el curso regular del proceso ejecutivo, en particular el remate legal de los bienes que "podía ser fuente de ganancias" para el acreedor. Así mismo, el comportamiento del secuestro fue ilegal e incorpora los ingredientes subjetivos exigidos por la Constitución (art. 90) y la ley (art. 71 ley 270 de 1996 y ley 678 de 2001) para que proceda la responsabilidad personal del agente, pues, como se indicó, a pesar de que el juez 19 civil de circuito le manifestó al secuestro que no era legalmente procedente retirar los bienes de Almadelco y venderlos, éste decidió hacerlo por su cuenta y riesgo, lo que se traduce en un comportamiento gravemente culposo...".

*particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”<sup>6</sup>.*

Examinado el material probatorio, se advierte que en efecto, ante el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, se adelantó el proceso ejecutivo N° 11001-40-03-029-**2017-00714**-00 en contra del señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, que promovió la empresa CARROFÁCIL COLOMBIA SAS, y que en dicho proceso se decretó como medida cautelar el secuestro del vehículo de placas JCS -971 de propiedad del actor; rodante que fue aprendido y puesto bajo la guarda y custodia de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., en el parqueadero ubicado en la “Cra 10 #17ª -81 (Funza – Cundinamarca)”, que por lo tanto, los trámites pertinentes para solicitar la entrega del automotor debería realizarlos ante dicha firma comercial. Ello según le comunicó dicho Despacho Judicial al referido señor mediante oficio N° 12051 del 30 de junio de 2020, en virtud de una comunicación que dicho parqueadero había allegado a esa Sede Judicial, en fecha 24 de julio de 2019 (fl. 15 del expediente digital).

En efecto, mediante escrito de fecha 24 de julio de 2019, el representante legal de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS LA PRINCIPAL S.A.S., dirigió un escrito al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo N° **2017-00741**, en el que actuaba como demandante la empresa CARROFÁCIL DE COLOMBIA SAS y como demandado el señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, para informar que, por motivos de reorganización de las instalaciones del parqueadero, el vehículo de placas JCS -971 había sido trasladado a la bodega de propiedad de esa firma comercial, ubicada en la carrera 10 N° 17ª – 81 en el municipio de Funza – Cundinamarca. Indicó la aludida empresa en dicho escrito que *“En ningún momento el vehículo sale de nuestra orbita de salvaguarda y custodia. No será entregado a otra compañía y/o se está realizando ninguna cesión y/o traslado a otra empresa, el vehículo continua bajo nuestra responsabilidad...”* (fl. 14 del expediente digital).

Por su parte, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, mediante oficio N° 13280 del 6 de marzo de 2020, le informó al Parqueadero LA PRINCIPAL S.A.S., que dentro del proceso ejecutivo N° 11001-

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

40-03-024-2017-00821-00, iniciado por la señora ELIANA PATRICIA MURILLO OROZCO en contra del señor WALTER APIFANIO ASPRILLA CÁCERES, que por auto del 7 de febrero de 2020 se había decretado la terminación del proceso por pago total de la obligación y, en consecuencia, se dispuso el levantamiento de la aprensión que recaía sobre el vehículo automotor de placas JCS -971 de propiedad del demandado. Solicitó dicho Despacho Judicial que debía darse aplicación a lo previsto en la Resolución N° 9540 de 2018, vigente para el cobro de las tarifas de parqueo de los vehículos que se encontraban inmovilizados en virtud de una orden judicial (fl. 11 del expediente digital).

En fecha 7 de julio de 2020, el señor SERGIO ESTEVAN CASTIBLANCO CRISTANCHO, obrando como representante legal de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., en respuesta a un derecho de petición elevado por el señor WALTER APIFANIO ASPRILLA CÁCERES, y le indicó, en relación con la entrega del vehículo de placas JCS -971, tipo camioneta, marca Mazda CX5, que en fecha 3 de marzo de 2020 bajo la noticia criminal N° CUI 254306000660202000169 se puso en conocimiento de las autoridades competentes la novedad presentada en las instalaciones de dicha firma comercial relacionada con el vehículo JCS -971. Indicó el representante legal de dicha sociedad, que en aras de que el propietario del vehículo no se viera afectado con los hechos presentados, dicha firma comercial estaba presta a adelantar la conciliación correspondiente, con el fin de brindarle de manera ágil una solución pronta al asunto (fl. 21 a 22 del expediente digital).

Bajo ese contexto, existe evidencia de que el aquí demandante fue demandado en dos procesos ejecutivos que se adelantaron ante la jurisdicción ordenaría y, en virtud de los mismos, se decretó el secuestro y aprehensión del vehículo de placas JCS -971, tipo camioneta, marca Mazda CX5 de su propiedad, el cual fue puesto bajo la guarda y custodia de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S.; automotor respecto del cual, por parte de dichas sedes judiciales, se dispuso su entrega al propietario, por lo que éste último debía adelantar las gestiones pertinentes para su devolución ante dicha firma comercial.

No obstante, el vehículo no fue devuelto al señor WALTER APIFANIO ASPRILLA CÁCERES, por parte de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR



EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. como quiera que el mismo fue objeto de hechos delictivos en las instalaciones de dicha firma comercial, por lo que ésta última empresa reconoció que debía reparar el daño irrogado al convocante, a través de los diferentes medios de conciliación.

Conforme con lo anterior, puede verse que en efecto, la convocada RAMA JUDICIAL, en virtud dos procesos de ejecución que se adelantaban en contra del aquí convocante, y como titular de la guarda jurídica que tenía respecto del vehículo de placas JCS -971 respecto del cual decretó medidas cautelares, dispuso que la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., se hiciera cargo de la **guarda material** del vehículo aprehendido, y fue en las instalaciones inmobiliarias de esta última empresa, que el vehículo en mención fue objeto de hechos delictivos que impidieron la devolución del automotor a favor del señor WALTER APIFANIO ASPRILLA CÁCERES, luego de que los referidos despachos judiciales ordenaron su entrega al entonces ejecutado y aquí convocante.

A propósito del depósito de bienes la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha distinguido tres nociones: la guarda material, guarda Jurídica y el deber de custodia<sup>7</sup>. En ese orden, dicha Corporación, en otros pronunciamientos señaló:

*"La primera de ellas surge cada vez que una entidad **mantiene la tenencia material de un bien, sea porque este fue voluntariamente entregado por un particular, o porque fue incautado por esa entidad en desarrollo de una faculta legal**; la segunda se presenta cuando la ley determina que un bien, de cuya tenencia se ha privado a su legítimo tenedor en desarrollo de un mandato legal, deba ser puesto a disposición de una entidad determinada. Y finalmente, el deber de custodia se deriva tanto de una como de otra modalidad de guarda, esto es, la material y la jurídica."*<sup>8</sup>.

Bajo ese contexto, es claro que los Despachos Judiciales, esto es los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Sexto de Ejecución Civil Municipal de Bogotá, poseían la guarda jurídica del vehículo de placas JCS -971, y provisionalmente, la guarda material del rodante quedó en

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 73001-23-31-000-2005-00871-01(36516).

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00201-01(44450)

manos de la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., y estando bajo su custodia y cuidado el rodante fue objeto de hechos delictivos que impidieron su restitución al propietario. Lo anterior evidencia que hubo, por parte dicha empresa, una omisión en el deber normativo de custodia de un bien que le había sido entregado para su guarda y cuidado material, hechos que comprometen su responsabilidad en el caso bajo estudio.

Ahora, del acervo probatorio allegado al expediente, no se advierte cuáles fueron las actuaciones, conductas u omisiones que pudieron configurar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la RAMA JUDICIAL que poseía la guarda jurídica respecto del aludido bien, y menos aún respecto de la entidad MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL en el acaecimiento y configuración del hecho dañoso sufrido el convocante.

Visto lo anterior, como quiera que la producción del daño causado al convocante, consistente en la imposibilidad de devolución del vehículo automotor de su propiedad que había sido aprendido con ocasión del decreto de medidas cautelares, fue producto de las omisiones en el deber de guarda material que, sobre el mentado bien, poseía la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S., se debe concluir que la conciliación extrajudicial celebrada entre las partes no lesiona el patrimonio público, dado que la indemnización ofrecida tiene su fuente en la probada responsabilidad de dicha empresa en los hechos dañosos; y además porque el convocante, en las condiciones en que fue planteada y aceptada la fórmula de conciliación, aceptó desistir de adelantar proceso judicial contra las convocadas NACIÓN – RAMA JUDICIAL y MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.

Por lo anterior, se concluye que el acuerdo logrado entre la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. y el señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, debe ser aprobado dado que en ella se pretende la indemnización de un daño causado al convocante, merced a la responsabilidad administrativa y patrimonial en que incurrió dicha firma comercial respecto de la guarda material y custodia del vehículo de propiedad del convocante, en orden a salvaguardar el principio superior de la equidad.

#### ***d) Revisión de inexistencia de causales de nulidad***

De conformidad con la legislación imperante, un acto jurídico está viciado de **nulidad absoluta** cuando tiene objeto y causa ilícitos, cuando se omite algún requisito o formalidad que la ley ha previsto para su validez, o cuando es realizado por personas absolutamente incapaces (artículo 1741 del Código Civil). En el caso bajo análisis se advierte que no existe ningún vicio de nulidad manifiesta que invalide el acuerdo conciliatorio, en particular porque el asunto sometido a arreglo sí es susceptible de conciliación, por ser de contenido patrimonial.

#### ***e) Soporte documental***

El Art. 73 de la Ley 446/98, agregó un nuevo presupuesto para que el acuerdo sea aprobado; es así como, además de la legalidad, la ausencia de caducidad de del medio de control y la no lesividad para los intereses patrimoniales del Estado, se requiere el material probatorio que avale el supuesto fáctico del acuerdo. El caso en estudio cumple satisfactoriamente con este presupuesto, pues se aportó toda la documentación relacionada en el acápite respectivo de la presente providencia.

#### ***f) Formalidades***

En observancia de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001, el acuerdo conciliatorio aquí homologado consta de un acta en la que se precisa el ente conciliador y las personas que en ella intervienen. En el mismo documento se indica en forma sucinta lo que se pretende y el acuerdo al que han llegado las partes, con el señalamiento de la cuantía y la forma y plazo para el pago.

### **III. CONCLUSIÓN**

Con fundamento en lo expuesto, concluye el Despacho que la conciliación extrajudicial que fue llevada a cabo el **25 de noviembre de 2020** ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, cumple con los requisitos de forma y oportunidad anteriormente señalados, y en tal virtud habrá de impartirse aprobación al acuerdo sobre la indemnización que la Sociedad ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. pagará

al convocante WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, por los daño que sufrió con la no entrega del vehículo de placas JCS -971, de su propiedad.

Por lo anterior, el *Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá*, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: APROBAR** la conciliación prejudicial celebrada el **25 de noviembre de 2020**, ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, entre la Sociedad ALMACENACIENTO DE VEHÍCULOS POR EMBARGO LA PRINCIPAL S.A.S. y el señor WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES, en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$52'000.000); monto que se pagará en la forma y términos indicados en el acta de conciliación respectiva, teniendo en consideración la fecha en que se emita la presente providencia.

**SEGUNDO:** Por Secretaría expídase a las partes, copia del acta de conciliación y de la presente providencia, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 1564 de 2012.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA**  
**JUEZ**

Dmtd

**JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO  
DE ORALIDAD  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C.  
-SECCIÓN TERCERA-**

***NOTIFICACIÓN POR ESTADO***

*El auto anterior, se notifica a las  
partes por anotación en estado de  
fecha \_\_\_\_\_, a las  
8:00 a.m.*

---

**OSCAR ROBERTO REYES  
SAAVEDRA  
Secretario**